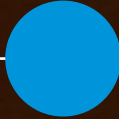


FEBRERO

REVISIÓN DEL AÑO



RUMANIA: Enormes protestas forzaron al gobierno a dar marcha atrás en su intención de ablandar su postura frente a la corrupción



MALAWI: Tras 12 años de campaña se aprobó la Ley de Acceso a la Información, en tanto que la sociedad civil mantuvo su preocupación en relación con una posible nueva política para las ONG.

Durante el mes de febrero, tuvieron lugar en **Rumania** multitudinarias protestas que obligaron al gobierno a dar marcha atrás con sus planes de introducir cambios para indultar a funcionarios corruptos e introducir penas menos severas para casos de corrupción. Si bien la medida fue retirada, la controversia continuó resonando a lo largo de todo 2017. En China, una **protesta ambientalista** demostró que incluso en condiciones de espacio cívico cerrado, las movilizaciones pueden tener éxito. Ante las protestas, realizadas contra la propuesta de crear una planta de aluminio en la provincia de Heilongjiang, las autoridades acordaron suspender su desarrollo. Entre otras protestas pacíficas del mes, más de mil personas **marcharon** en Rabat, la capital de Marruecos, para conmemorar el sexto aniversario del alzamiento popular de 2011 y llamar la atención sobre la falta de progreso verificada desde entonces en cuestiones fundamentales, tales como la corrupción, el costo de vida y la vivienda, mientras que por lo menos 2.000 mujeres **se manifestaron** en Podgorica, capital de Montenegro, contra los recortes de beneficios sociales para las madres; las protestas resurgieron en **abril**, cuando fracasó un intento de declarar los cambios inconstitucionales, y en junio, cuando el parlamento votó su aprobación.

Durante febrero también se vieron ejemplos de protestas lideradas por movimientos reaccionarios contrarios a los derechos humanos, que en muchos países vienen creciendo y pretenden normalizar el discurso racista, sexista y xenófobo. En Sofía, la capital de Bulgaria, tuvo lugar una **manifestación** neonazi, a pesar de una prohibición del municipio. La reunión fue precedida por protestas antifascistas la semana anterior. La manifestación puso de relieve un problema más amplio ligado a la divulgación y aceptación del discurso contrario a los derechos humanos en Bulgaria; la Asociación de Periodistas Europeos en Bulgaria **observó** que durante el período electoral de febrero a marzo, las referencias a refugiados y romaníes en los medios fueron abrumadoramente negativas. En Macedonia, dos periodistas fueron **agredidos** y golpeados mientras cubrían una protesta organizada por un grupo partidario del gobierno en el marco de una creciente antipatía hacia la minoría étnica albana en el país. Las tensiones se incrementaron, y en abril partidarios nacionalistas irrumpieron

en el parlamento después de la elección de un vocero parlamentario albano, con un saldo de más de 100 personas heridas, entre ellas varios periodistas. Luego de las elecciones se alcanzó un punto muerto caracterizado por la polarización en cuestiones relacionadas con la participación de los partidos que representan a la etnia albana y el reconocimiento del idioma albano; en mayo, finalmente, se llegó a un **acuerdo** de coalición.

En Pretoria, Sudáfrica, tuvieron lugar **protestas** xenófobas contra los inmigrantes, las cuales dieron como resultado enfrentamientos violentos entre manifestantes e inmigrantes. La intolerancia también se hizo presente en Bosnia y Herzegovina, cuando miembros de la OSC Asociación para la Investigación Social y la Comunicación fueron **agredidos** verbal y físicamente por participar en una manifestación en solidaridad con la comunidad LGBTI. El trayecto hacia las elecciones presidenciales en Francia también exhibió un discurso racista, que generó en respuesta protestas y violentos enfrentamientos con partidarios del Frente Nacional, de extrema derecha, así como también **ataques** en los medios de comunicación. Las **protestas** suscitadas por una presunta agresión policial contra un joven de raza negra estuvieron marcadas por la violencia.

Durante febrero se produjeron varios incidentes de uso de violencia contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. Por lo menos **cinco personas** fueron asesinadas en hechos de violencia en Guinea, luego de que una huelga de maestros que duró siete semanas condujera al cierre de escuelas y a protestas estudiantiles en las cuales la policía utilizó gases lacrimógenos contra los estudiantes movilizados. El mismo mes en Guinea, Mariam Kouyaté, una periodista radial, fue arrestada, acosada e interrogada agresivamente después de que hablara por los medios de difusión sobre las malas condiciones hospitalarias. En Bangladesh la policía **disolvió** por la fuerza varias manifestaciones, haciendo uso de bastones, gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. Entre las protestas reprimidas se contaron una protesta contra el aumento del precio del petróleo en la capital, Dhaka, una sentada en la ciudad de Chittagong y una protesta estudiantil en reacción a una golpiza propinada a un estudiante por las fuerzas de seguridad. En

Suazilandia, la policía bloqueó una **marcha** organizada por miembros del Congreso de Sindicatos de Suazilandia para presentar una petición sobre derechos laborales ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Por otro lado, también en Suazilandia fueron utilizados en el mes de abril cañones de agua y bastonazos para dispersar una **protesta estudiantil**.

En dos contextos muy diferentes las elecciones llevaron a la impugnación del espacio cívico. En Turkmenistán, el presidente dictatorial Gurbanguly Berdimuhamedow fue reelecto con más del 97% de los votos en una elección amañada en la cual los candidatos fueron cuidadosamente seleccionados para ofrecer una oposición simbólica. Ninguna elección en Turkmenistán ha sido nunca declarada libre y competitiva por observadores internacionales independientes. Las elecciones fueron precedidas por una **renovada ofensiva** contra las libertades de la sociedad civil, que incluyó la vigilancia, el acoso y la detención de activistas, usuarios de redes sociales y periodistas. Durante el año también se evidenciaron varios ejemplos de la **movilización forzosa** de personas para participar en actos del gobierno. En Ecuador, las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en febrero, con una segunda vuelta en abril, resultaron en una estrecha victoria para el partido gobernante. Inmediatamente antes de las elecciones, cinco medios de comunicación fueron cerrados luego de sufrir ciberataques. Todos ellos habían publicado notas sobre los altos niveles de corrupción reinantes. El mes anterior, más de 100 oficiales de policía habían irrumpido en una **estación de radio** después de que ésta emitiera un mensaje de un líder indígena que participaba en protestas contra la minería.

En Lesotho se produjeron otros ataques contra los medios, cuando dos estaciones de radio privadas fueron **sacadas del aire** por el gobierno por a presunta emisión de material que difamaba al primer ministro y a altos funcionarios. Posteriormente, tras apelar ante el Tribunal Superior, las radios pudieron reanudar su transmisión. El mes siguiente, la policía expulsó a periodistas de la galería de prensa del parlamento durante una moción de censura contra el gobierno. En Eritrea, **dos periodistas** de la Agencia Eritrea

de Radio y Televisión fueron arrestados y detenidos bajo la acusación de intentar huir del país. Se trata de un delito grave en Eritrea, donde una **gran cantidad** de personas intenta escaparse del país y los trabajos forzados son cosa de rutina. Cerca de allí, en Somalilandia, **Baashe Hassan**, director de Star TV, fue detenido durante cinco días luego de criticar al gobierno por permitir que los Emiratos Árabes Unidos establecieran una base militar. En el Líbano, 300 personas **atacaron** la sede central de una estación de TV, al-Jadeed, después de que ésta emitiera un programa sobre el fundador de un importante partido político.

La periodista uruguaya **Isabel Prieto Fernández** escapó apenas de un intento de asesinato luego de escribir un artículo sobre su experiencia como víctima de mala conducta y acoso policial en el marco de la investigación de un caso de femicidio. Entretanto, el acceso a la información fue limitado en Uruguay por efecto de un nuevo decreto que amenaza con generar serias repercusiones para los denunciantes internos. La Asociación de la Prensa Uruguaya **apeló** ante el Tribunal Administrativo para que revocara el decreto. Al mes siguiente, otro decreto aumentó las facultades de la policía para despejar las calles y caminos durante las protestas, lo que provocó marchas contra la medida. En **Malawi**, por su parte, se observó un avance cuando finalmente, tras más de una década de lucha de la sociedad civil, se aprobó la ley de acceso a la información; no obstante, al mismo tiempo la sociedad civil manifestó su inquietud ante una nueva política potencialmente restrictiva para las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En los primeros meses de 2017 circularon noticias contradictorias en relación con los numerosos activistas de la sociedad civil encarcelados y detenidos en Uzbekistán. En febrero, el periodista **Muhammad Bekjanov** fue liberado después de cumplir una colosal pena de 18 años de prisión, y exhibió signos claros del maltrato infligido durante su estadía en la cárcel. Permaneció bajo supervisión policial y no se le permitió salir del país. Su colega Yusuf Ruzimuradov permaneció en la cárcel. El mes siguiente **Jamshid Karimov**, un periodista independiente y sobrino del difunto presidente, fue liberado

de un hospital psiquiátrico donde había permanecido en internación forzosa desde 2006. Sin embargo, ese mismo día, la defensora de derechos humanos **Elena Urlaeva** fue detenida por la fuerza y retenida durante **23 días** en una institución psiquiátrica. Su detención se produjo justo antes de las reuniones que tenía programadas con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Banco Mundial. La activista había documentado la práctica del trabajo forzado en la industria del algodón en Uzbekistán. Varios otros periodistas **fueron** en lo sucesivo arrestados, detenidos y acosados.

Las organizaciones humanitarias fueron blanco de agresiones en la República Centroafricana. En un **ataque** perpetrado en el pueblo de Bocaranga, las oficinas del Comité Internacional de Rescate y el Consejo Danés para los Refugiados fueron atacadas, saqueadas e incendiadas y se denunció que hubo varios muertos. En el nivel internacional, 40 OSC se unieron para expresar su preocupación acerca de la exclusión del pueblo sirio de las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU que se celebran en Ginebra. Instaron a que el proceso de paz otorgue prioridad a **cinco** cuestiones fundamentales de derechos humanos: poner fin a los ataques ilegales, garantizar el ingreso de ayuda y el paso seguro para los civiles que huyen, garantizar el acceso a la justicia, reformar el sector de seguridad y liberar a los detenidos. Llamaron la atención sobre la gran cantidad de manifestantes pacíficos y activistas que han sido detenidos y cuyos derechos han sido negados; se estima que **100.000 personas** han sido detenidas en Siria. El **1 de marzo**, la Comisión Internacional Investigadora Independiente de la ONU sobre Siria dictaminó que ambos bandos habían cometido crímenes de guerra durante la batalla de Alepo: el hallazgo puso de relieve la necesidad de que la sociedad civil continúe ejerciendo presión sobre la maquinaria internacional para cuestionar la impunidad para los abusos contra los derechos humanos.

El compromiso de la Unión Europea (UE) con los derechos humanos quedó puesto en cuestión con la **visita** del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para debatir la negociación de un acuerdo de asociación. Su visita a la UE se

produjo a pesar de la existencia de numerosas pruebas de abusos de derechos humanos en su país, entre ellas detenciones y torturas, lo cual provocó la indignación generalizada de la sociedad civil. Hubo también numerosas protestas, en particular frente al Parlamento Europeo, cuando la institución **aprobó** un polémico acuerdo comercial de orientación neoliberal con EEUU y Canadá, el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG). Lo que preocupa a la sociedad civil es el potencial impacto del acuerdo sobre el empleo y las normas laborales, así como los poderes que daría a las corporaciones transnacionales para demandar a los estados por incumplimiento. En el orden internacional hubo algunas noticias más positivas; tal fue el caso del **dictamen** de la Corte Suprema de Sudáfrica que estableció la inconstitucionalidad e invalidez de la decisión del gobierno de abandonar la Corte Penal Internacional e indicó que la medida debía ser remitida nuevamente al parlamento. En espera de ello, se ordenó al gobierno que cancelara su notificación de retirada de la CPI. La decisión fue tomada en respuesta a una demanda interpuesta por la sociedad civil.

RUMANIA: EL PODER POPULAR CUESTIONA EL TRATO BENEVOLO PARA CON LA CORRUPCIÓN

En **Rumania**, multitudinarias **protestas** obligaron al gobierno a abandonar un intento de adoptar una postura menos exigente hacia la corrupción. Sin embargo, el tema continuó dominando la política rumana durante el resto del año.

Las protestas anticorrupción se han convertido en un suceso habitual en el país, lo cual es indicativo tanto del nivel de indignación del pueblo rumano con los efectos de la corrupción sobre sus vidas, como de las dificultades de cuestionar un problema tan arraigado. Luego de un devastador incendio que

en 2015 dejó un saldo de 62 muertos en una discoteca, quedaron expuestas las prácticas corruptas que redundaban en un desprecio flagrante por la seguridad pública, y surgieron **protestas masivas** que obligaron al primer ministro y al gobierno a dimitir. Pero en diciembre de 2016 el mismo partido regresó al poder y se dedicó a facilitar los actos de corrupción. A fines de enero, el gobierno aprobó leyes de emergencia que resultarían en perdones para muchos reclusos que cumplían condenas de cinco años o menos y despenalizarían los casos de mala conducta de funcionarios que causaran pérdidas de menos de 200.000 lei rumanos (aproximadamente US\$51.000). El gobierno afirmó que su intención era aliviar el hacinamiento carcelario, pero para muchos quedó claro que el verdadero objetivo era sacar o mantener a los políticos corruptos fuera de prisión. Uno de los beneficiarios más importantes de estas medidas habría sido **Liviu Dragnea**, presidente de la socialdemocracia, el partido gobernante, quien había sido encontrado culpable de fraude electoral en abril de 2016 y se enfrentaba a nuevas acusaciones de corrupción en 2017. Bajo las nuevas reglas, él hubiera estado en condiciones de volver a desempeñarse como primer ministro.

El pueblo se enfureció no solo ante las reglas propuestas, indicativas de un alto nivel de permisividad hacia la corrupción, sino también por el modo secreto y antidemocrático con que el gobierno intentó introducirlas. Cuando en la noche del 31 de enero se anunció discretamente que la medida había sido aprobada, la única conclusión posible fue que el gobierno intentaba filtrar el polémico cambio atrayendo tan poca atención como fuera posible.

Sin embargo, lo único que el gobierno logró fue llamar la atención. Tal como relata **Viorel Miclescu**, de **CENTRAS: Centro de Asistencia para las Organizaciones no Gubernamentales**, más de **10.000 personas** se reunieron para protestar en la capital, Bucarest, a las pocas horas de recibir la noticia, y las protestas crecieron con el correr de los días, hasta que obligaron al gobierno a revertir la medida.



Más de 200.000 rumanos protestan en la capital, Bucarest, contra propuestas para debilitar las políticas anticorrupción

*Tan pronto se corrió la voz, la gente salió a las calles. En un primer momento el gobierno los ignoró, pero luego, a medida que aumentaba la cantidad de manifestantes y la protesta seguía días tras día, se vio forzado a **retirar** la legislación de emergencia. Fueron las mayores protestas en décadas. En un punto, se calculó que medio millón de personas salió a las calles, y más de 200.000 en Bucarest. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, si bien ocurrieron enfrentamientos periódicos entre la policía y los manifestantes. Cuando los manifestantes arrojaban objetos a la policía, los oficiales **respondían** con gases lacrimógenos. Luego de uno de esos enfrentamientos, 20 personas fueron arrestadas y ocho resultaron heridas.*

Era fundamental, sugiere Viorel, que las protestas fueran creativas e imaginativas, y que captaran la atención internacional, algo que cambió la ecuación dentro de Rumania:

*La gente puso mucha energía y **creatividad** en las protestas. Usó el humor, creó ingeniosos eslóganes y memes y resignificó los símbolos de la cultura pop. Esto le permitió ganarse el favor de los medios internacionales, que vieron a los ciudadanos comunes salir al frío después del trabajo, quedarse allí durante horas en la noche y exhibir toda esa creatividad. Conoció a varios periodistas de medios de comunicación internacionales. Estaban impresionados por la intensidad de la protesta y la capacidad de los manifestantes para responder preguntas en varios idiomas. Como resultado, dieron una cobertura amplia y positiva de los sucesos, lo cual ejerció presión sobre los políticos europeos para que hicieran algo al respecto y para que los países europeos reaccionaran con fuerza, cosa que hicieron.*

La sociedad civil rumana necesita apoyo internacional y tiene más energía cuando sus acciones consiguen cobertura internacional. La visita de una delegación del Parlamento Europeo en marzo fue especialmente significativa. Los visitantes se reunieron con los líderes de grupos de manifestantes, muchos periodistas escribieron sobre

ellos y el mundo descubrió que los ciudadanos rumanos quieren una buena gobernanza, defienden los valores europeos y apoyan los esfuerzos anticorrupción.

Las protestas lograron con seguridad un efecto a corto plazo. Después de una semana, el gobierno rescindió el decreto de emergencia. El **Ministro de Justicia**, Florin Iordache, tuvo que renunciar, el **líder de la bancada de senadores** del partido gobernante, que encabezaba la movida, fue trasladado a otro puesto, y el parlamento **votó** el 21 de febrero la confirmación de la derogación de las modificaciones. Pero las protestas continuaron incluso cuando se estaba dando marcha atrás con las medidas, y los manifestantes dejaron en claro que no confiaban en el partido gobernante y los líderes políticos. Las protestas continuaron semanalmente hasta marzo, y Rumania fue testigo de **más manifestaciones** en el curso de 2017, entre ellas protestas en reclamo por los bajos salarios y contra la tala ilegal.

Para **Stefan Cibian**, de la **Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Rumania**, no resultó sorprendente que las protestas continuaran, dada la naturaleza sistémica del problema:

*Las protestas continuaron por un buen motivo, ya que varias leyes recientes, entre ellas las **reglamentaciones** sobre OSC y los decretos de emergencia emitidos por el gobierno rumano, indicaban que las instituciones públicas estaban siendo utilizadas para dismantelar la democracia y limitar el espacio de la sociedad civil. El objetivo no es la corrupción; la corrupción es sólo el medio. El verdadero objetivo es mantener el control sobre la sociedad, y para lograrlo es necesario obtener un poder discrecional sobre los recursos. Esa es también la razón por la cual, si bien la reacción del gobierno ante los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta fue en un principio suave, hubo una tendencia a la intervención creciente del gobierno para limitar las protestas, desatar la violencia y luego utilizar esa violencia como excusa para la represión.*

En lugar de defender los principios democráticos, los partidos que surgieron luego del período comunista en Rumania funcionan como mecanismos para capturar el Estado en beneficio de diversos intereses privados e incluso ilegales... Las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad no encarnan principios democráticos. Los partidos intentan controlar a la sociedad, no representarla.

Esto significa que, a pesar del éxito de las protestas de febrero, la determinación del partido gobernante de suavizar las reglas sobre la corrupción siguió presente. La presión generada por las protestas llevó al gobierno a consultar sobre los cambios propuestos, pero las consultas solo afirmaron la indignación de las protestas, sugiere Viorel:

En abril, el gobierno respondió a los pedidos de la UE, los EEUU y otros actores de analizar adecuadamente la legislación, incluso a través de debates y consultas con jueces y magistrados. Sin embargo, los resultados de la investigación fueron insatisfactorios para el partido y los líderes del gobierno, porque mostraron que dichos funcionarios no querían que la legislación fuera en modo alguno suavizada. El único consenso existente en el poder judicial en torno de los indultos es que éstos no se deben aplicar a las personas que hayan sido condenadas por casos de corrupción. La mayoría cree que permitir que los funcionarios públicos encarcelados por soborno, mala conducta en funciones, conflicto de intereses o tráfico de influencias se beneficien con indultos generaría incentivos equivocados. Muchas personas, entre las que se cuentan funcionarios judiciales, tienen la sensación de que su propio gobierno los ha traicionado.

Y sin embargo, relata Viorel, los intentos de cambiar la ley continuaron, lo cual es indicativo del nivel de desesperación que tiene el partido gobernante por facilitar la corrupción, a pesar de que ello provocó más protestas:

*En agosto, el Ministro de Justicia propuso nuevas reformas que, según los críticos, debilitarían no solo la lucha contra la corrupción, sino también el estado de derecho y la independencia del poder judicial. Esto nos llevó de vuelta al inicio... En octubre el ex Ministro de Justicia Florin Iordache fue **nombrado** presidente del comité parlamentario para garantizar la estabilidad legislativa en el ámbito de la justicia. Así que, al fin y al cabo, la lucha pasó del gobierno al parlamento. El gobierno dio marcha atrás, pero los miembros del parlamento siguen desafiando la indignación de la opinión pública. Varios meses después de los hechos, la gente seguía ocupando la plaza ubicada frente al edificio del gobierno en Bucarest... En noviembre, nueve meses después de las primeras protestas, los rumanos volvieron a **protestar** contra los cambios legislativos propuestos y le recordaron al gobierno que permanecían alertas ante cualquier intento de frenar la lucha contra la corrupción.*

El fracaso del gobierno en su intento de aprobar dichas medidas hizo que el partido gobernante le retirara su apoyo en junio. El primer ministro fue derribado y su reemplazante fue a su vez **expulsado** en enero de 2018, para ser reemplazado por alguien considerado **más cercano** al líder del partido. Esta lucha en curso, librada en el seno del partido gobernante y ante la indignación de la población, también hace que las OSC sean atacadas, informa Viorel:

*Las OSC son el objetivo de una legislación restrictiva. No será tan malo aquí como en Hungría (véase junio), pero la mayoría política se encamina en el mismo sentido. Hay una constante campaña de desprestigio contra las OSC y se insinúa repetidamente que las OSC tienen un interés oculto en la desestabilización del país. En junio se propuso un **proyecto de ley** para permitir el cierre forzoso de toda OSC que no publique informes de sus ingresos y gastos, además de los nombres de todos sus donantes, dos veces al año. Se trata de una carga arbitraria, mucho más exigente que la que se aplica en otros ámbitos, y está destinada a aumentar el control político sobre*



ANTI-CORRUPTION
IS IN OUR
DNA

Las protestas contra la corrupción continuaron a lo largo de 2017

Crédito: Getty Images

la sociedad civil. La medida fue silenciosamente aprobada por el Senado en noviembre y enviada para su consideración por la Cámara de Diputados. Estamos seguros de que lograremos bloquearla, pero también sabemos que a continuación sobrevendrá una nueva avanzada del gobierno para restringir a la sociedad civil.

En el momento de la redacción de este informe **tenían lugar** nuevas protestas; a un año de sus comienzos, los líderes políticos rumanos seguían intentando habilitar la corrupción y el pueblo rumano continuaba movilizándose para impedirlo. De ahí que Stefan se pregunte si es posible sostener el impulso de la protesta, y qué papel podrían desempeñar en ello las OSC:

Las movilizaciones de 2017 solo lograron posponer los planes del partido gobernante, que ahora están siendo trasladados al parlamento. Las reacciones de los ciudadanos, por otro lado, están lejos de tener la fuerza que tenían a comienzos de 2017.

Lo que produjeron las movilizaciones de 2017 fue, por un lado, un número cada vez mayor de gente enfadada, y por el otro, un creciente número de personas impotentes. Las OSC establecidas desempeñaron un rol en las protestas, pero hasta ahora este ha sido un fenómeno marginal. Su capacidad para movilizar a los ciudadanos, o para coordinarse entre sí, sigue siendo alarmantemente baja. Si bien se establecieron conexiones con movilizaciones con ideas afines en otras partes del mundo, éstas han ocurrido más que nada en el nivel de la inspiración y alcanzan a muy pocos de los involucrados.

Los desafíos actuales se relacionan con la debilidad inherente a la sustentabilidad de la sociedad civil organizada. La democratización impulsada por la asistencia de donantes no ha generado aún una sociedad civil organizada sostenible ni en términos de recursos ni en términos de conexión con el ámbito gubernamental, ni ciertamente con las comunidades locales... La sociedad civil es débil en términos de organización y de capacidad para articular intereses comunes, mientras que mantiene distancia respecto de los principales partidos políticos.

La organización de Viorel reconoció que un nuevo grupo de personas se había movilizado en respuesta a las medidas sobre la corrupción y se había organizado en gran medida de manera informal, por fuera de las estructuras de las OSC y haciendo un uso intensivo de las redes sociales. A la hora de sostener la energía del reclamo, fue importante que no se intentara forzar a los movimientos de protesta a organizarse en estructuras de OSC convencionales, que habrían drenado sus energías en un momento crucial. En cambio, para intentar sostener el impulso, su organización lanzó un nuevo fondo para recaudar donaciones individuales y apoyar acciones de seguimiento que fomentaran el activismo y fortalecieran los valores cívicos. Desde el punto de vista de Viorel, algo muy importante que sucedió en 2017 fue que quienes fueron atraídos hacia la protesta tienen el potencial de seguir siendo ciudadanos activos.

Como resultado de las acciones del gobierno en enero y febrero, muchas personas que vivían dentro de un estrecho triángulo privado -trabajo, familia, vacaciones- se convirtieron súbitamente en ciudadanos comprometidos. Se volvió evidente para todos que había una enorme brecha entre el pueblo y la denominada clase política.

Ahora tenemos toda una nueva generación de ciudadanos alertas. La política se ha convertido en uno de los temas más frecuentes de las conversaciones cotidianas. Se están organizando debates y foros

para canalizar todas estas energías, porque la gente hace mucho tiempo que no se dedica a practicar los valores cívicos y recién está aprendiendo cómo participar, cómo formar y expresar una opinión y cómo interpretar los acontecimientos políticos.

En tiempos normales, una protesta típica contra los abusos del gobierno reuniría a unos pocos cientos de personas, pero en febrero salieron a manifestarse cerca de 600.000 en toda Rumania, en una sola noche. La protesta llegó a las ciudades pequeñas y a pueblos donde nunca antes había habido una protesta. Estas fueron de lejos las protestas más grandes que se vivieron en esta parte del mundo.

Las protestas contra la corrupción y en favor de los valores europeos adquieren un significado mucho más importante en momentos de incertidumbre, tras el voto a favor del Brexit en el Reino Unido y el avance de la extrema derecha en las elecciones holandesas y francesas. Estas protestas transmiten un mensaje de unidad en torno de los valores europeos, y en ese sentido pueden ser vistas como un modelo para las protestas del futuro.

Estos son tiempos fascinantes. Por un lado, nunca antes habíamos tenido políticos tan malvados y egoístas y de tan baja calidad humana y profesional. Por otro lado, existe ahora una masa de gente nueva que ingresa al ámbito cívico, preparándose para controlar al gobierno y eventualmente para ayudar a educar a los políticos. Los políticos solo podrán ser educados si los ciudadanos primero se educan a sí mismos: es necesario que muchos más millones despierten y comprendan que hay otra manera de vivir la vida.

Dado que el gobierno sigue intentando aprobar sus medidas en relación con la corrupción, Stefan considera que la democracia rumana se encuentra en un momento crítico en el cual las acciones del pueblo pueden inclinar la balanza de manera decisiva. Para que Rumania se resista a seguir el camino

FEBRERO REVISIÓN DEL AÑO

de otros países en los cuales dirigentes de mano dura han aumentado la represión, el pueblo rumano y las OSC deben continuar movilizándose y demandando una mayor participación en la gobernanza:

Describiría el estado actual de la democracia en Rumania como preocupante. En esencia, solía haber una tendencia positiva en el nivel de los movimientos de base, donde las personas y las comunidades cobraron vida después del final del régimen totalitario y traicionero que duró hasta 1989. Más recientemente, sin embargo, el ánimo político ha revertido hacia las prácticas totalitarias previas a 1989.

Desafortunadamente se trata de una tendencia más amplia, ya que varios países de la región son gobernados por líderes elegidos democráticamente que están, esencialmente, destruyendo o socavando los sistemas democráticos que los llevaron al poder. Uno tras otro, los países de Europa Central y Oriental, y no exclusivamente los de esa región, están siguiendo el mismo enfoque: la República Checa, Hungría, Polonia, Rusia, Turquía y ahora Rumania.

Este es un momento crucial para la democracia rumana. Si los ciudadanos son capaces de reconocer lo que está sucediendo y de movilizarse, serán capaces de proteger sus derechos y restablecer un sistema democrático. Si no lo hacen, es muy probable que Rumania se una al club de las “democracias iliberales” de la región.

MALAWI: SE APRUEBA UNA LEY POSITIVA AL TIEMPO QUE AVANZA UNA MEDIDA PREOCUPANTE

Para la sociedad civil de **Malawi**, 2017 representó un paso adelante, pero también un potencial paso atrás. En **febrero**, el presidente Peter Mutharika promulgó la Ley de Acceso a la Información (LAI); el proyecto había sido aprobado por el parlamento en diciembre de 2016 y aguardaba desde entonces la firma del presidente. Al igual que con la ley similar aprobada en el Líbano el mes anterior, el momento marcó la culminación de una **larga campaña** de incidencia de la sociedad civil, que en Malawi había durado 12 años. Aunque celebró este suceso, la sociedad civil enfrenta actualmente una amenaza creciente, encarnada en una nueva política sobre ONG que amenaza con imponer nuevas restricciones sobre la sociedad civil.

SE NECESITA
UNA POLÍTICA
DE ONG
ROBUSTA,
FLEXIBLE E
INCLUSIVA
QUE ABORDE
LOS DESAFÍOS
QUE
ENFRENTAN
LAS OSC



Fletcher Simwaka, del Centre for Human Rights and Rehabilitation, describe los recientes acontecimientos, positivos y negativos, para la sociedad civil de Malawi:

En algunos casos se percibe que el gobierno está tomando medidas encomiables para que los ciudadanos de Malawi gocen cada vez más de diversos derechos civiles y políticos. Sorprendentemente, el presidente promulgó la muy esperada LAI. Se trata de un hito, ya que la ley permitirá que los ciudadanos tengan acceso a información vital retenida por el gobierno. La LAI es una herramienta eficaz para consolidar una cultura de transparencia y apertura del funcionamiento del gobierno. Además de la LAI, una importante mejora del espacio cívico es que el gobierno está relajando su antigua postura sobre la libertad de reunión. Los ciudadanos comprometidos y los activistas de derechos humanos ahora pueden llevar a cabo protestas pacíficas contra el gobierno sin enfrentar excesivas trabas legales.

Por otro lado, el gobierno ha demostrado vestigios de intolerancia hacia los derechos humanos y las libertades básicas, especialmente en relación con los defensores de derechos humanos y la sociedad civil. La administración actual recurre a la táctica de dividir y conquistar para debilitar y aislar a la sociedad civil. Lo hace mediante la designación de algunos defensores de derechos humanos en puestos gubernamentales. Además, el gobierno ha adoptado un rol de liderazgo a la hora de influenciar las elecciones de los líderes de la sociedad civil en las redes y plataformas de sociedad civil, apoyando a sus lacayos. Lamentablemente, el gobierno está recurriendo a la aplicación selectiva de la justicia con el fin de escudar a quienes son leales al partido gobernante. Los únicos casos que se tratan de manera expeditiva son los que involucran a críticos del gobierno.

En cuanto a la política sobre ONG propuesta, tal como relata Fletcher, la sociedad civil tuvo una postura crítica en relación tanto con el proceso

de formulación de la nueva política como con sus contenidos y posibles consecuencias para las ONG, incluso en términos de autonomía y alcance de sus operaciones:

La preocupación más importante que tiene la sociedad civil en relación con la política para las ONG es que para formular el borrador no se realizaron consultas amplias y significativas con la sociedad civil. Los proponentes de la política se embarcaron solamente en consultas selectivas con OSC favorables al gobierno. En segundo lugar, en su definición de la sociedad civil el borrador de la política prácticamente no menciona a las OSC dedicadas a la gobernanza y los derechos humanos. Trabaja sobre el supuesto de que todas las OSC son organizaciones comunitarias, de caridad, que existen simplemente para complementar la prestación de servicios por parte del gobierno. Se trata de una omisión deliberada y peligrosa, ya que puede socavar de manera sistemática la función igualmente importante de las OSC dedicadas a la gobernanza y los derechos humanos en Malawi.

El borrador de la propuesta no menciona la protección de las OSC ni de los defensores de derechos humanos. La política debería reconocer el importante papel de las OSC en tanto que guardianas del ejercicio de la autoridad política y jurídica por parte de los ocupantes de cargos públicos. Es necesario expandir las áreas prioritarias de la política.

El borrador de la propuesta otorga a las estructuras de planificación del desarrollo mayores e injustificados poderes para aprobar los proyectos creados por las OSC. La propuesta señala que “un proyecto no se ejecutará a menos que sea aprobado por estas estructuras”. Estos amplios poderes violarían la independencia y la privacidad de las OSC.

Otras preocupaciones se centraron en el aumento de la carga administrativa que la nueva política podría imponer a las OSC y en la posibilidad de que el gobierno revoque la personería de las OSC con las cuales discrepa. Esto

es particularmente preocupante porque en 2016 el Ministro de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social pidió al órgano reglamentario oficial, el Consejo de ONG, que **cerrara** las OSC irresponsables, designación que en la práctica refería a las organizaciones críticas del gobierno. La sociedad civil de Malawi ya hace frente a limitaciones para expresarse. Los problemas denunciados en 2017 incluyeron intentos oficiales de **desacreditar** una protesta que tuvo lugar en enero sobre el precio del maíz vendido por una empresa estatal; la detención de un joven activista, **Steven Simsokwe**, por protestar contra el traslado de un campo de refugiados; amenazas contra un activista de internet, **Negracious Justin**, por cuestionar el alto costo de un proyecto de abastecimiento de agua; y la condena y deportación de **ocho activistas** de la vecina Tanzania que intentaban limitar el efecto de la minería del uranio sobre las comunidades. Los ocho activistas sufrieron **malos tratos** mientras estuvieron detenidos. Tomados en conjunto, estos incidentes sugieren que el gobierno sigue siendo sensible al escrutinio y las exigencias de rendición de cuentas, particularmente en relación con el gasto público.

Lo que se temía es que cualquier política nueva hiciera más difícil para las OSC defender derechos, exigir rendición de cuentas y expresarse en contra de los ataques contra activistas, preocupación que plantea Fletcher:

La política aumentará la carga administrativa que recae sobre las OSC y permitirá que sus solicitudes de renovación de registro sean rechazadas en función de criterios burocráticos y que las OSC que cuestionen al gobierno sean atacadas. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2014 cuando el Consejo de ONG amenazó con cerrar las OSC que no estuvieran registradas ante el Consejo, a pesar de que la ley sobre las ONG (2000) no otorgaba al Consejo poderes para cerrar una OSC.

Entre las OSC que están en la mira y que podrían quedar desregistradas se cuentan muchas que están involucradas en asuntos políticos y se expresan sobre ellos. Muchas voces dentro de la sociedad civil han señalado que esta medida está encaminada a atacar a las

OSC que trabajan en derechos humanos y gobernanza y son críticas del gobierno. Esta disposición ha sido siempre una fuente de tensión en la relación entre el gobierno y las OSC que se concentran en los derechos humanos.

En respuesta, Fletcher hace las siguientes recomendaciones, y pide el apoyo de la comunidad internacional:

La Ley de ONG debe ser revisada y modificada para reflejar el espíritu del constitucionalismo; se necesita una política de ONG robusta, flexible e inclusiva que aborde los desafíos que enfrentan las OSC; y el gobierno debe proponer una ley que proteja a los defensores de derechos humanos.

Se requiere el apoyo de la sociedad civil internacional para generar capacidad en la sociedad civil y empoderarla para demandar, promover y proteger el espacio cívico en Malawi. También hay oportunidades para que la sociedad civil internacional se asocie con la sociedad civil local para promover el cambio.

En el momento de redactar este informe, el gobierno todavía no había finalizado el borrador de la política de ONG. Muchos actores de la sociedad civil han pedido más tiempo para que puedan realizarse consultas con un espectro más amplio de la sociedad civil. Quieren que el gobierno muestre que está dispuesto a escuchar y que proponga una política más inclusiva, más propicia para la autonomía de la sociedad civil, y más solidaria con la amplia variedad de funciones que la sociedad civil puede desempeñar, entre ellas la promoción de la democracia, la buena gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto de los derechos humanos.